

COLOMBIA: Drogas-Seguridad

De los inconvenientes de confundir la política de drogas con la política de seguridad

Una de las consecuencias más trágicas, quizás, de asociar la 'guerra a las drogas' a la 'guerra al terrorismo' en un país como Colombia es que el fracaso de la primera puede terminar convirtiéndose también en el fracaso de la segunda.

A pesar de la fantástica manipulación que las autoridades hacen de las cifras resultantes de las campañas antinarcóticos, que la guerra a las drogas es un fracaso, es una evidencia que hoy día solamente en las esferas más altas de los gobiernos - colombiano y estadounidense - todavía se niegan a reconocer. Pero aparte de estos, ya no queda institución académica, *think tank*, departamento de especialistas de políticas de drogas oficial o no oficial, etc, tanto en el norte como en el sur del hemisferio, que no lo haya demostrado con argumentos contundentes. No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza un viejo proverbio castellano. Una ceguera altamente costosa, no sólo en términos monetarios, sino en términos del desarrollo humano, social y económico de la región.

De igual modo, en lo que respecta a la seguridad del país, las autoridades colombianas ofrecen ahora cifras que a primera vista parecen muy favorables. Desconociendo que tras estas cifras, que revelarían un triunfo de la llamada política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, se halla oculta una realidad siniestra.

Con motivo de la reunión de una nueva Mesa de Donantes para Colombia el 3 de febrero en Cartagena, vale la pena darle un vistazo a la situación en la que se encuentra el país en lo referente a las drogas y a la seguridad. Que los países y entidades donantes al hacer sus aportes tengan en cuenta lo que ha representado en estos últimos cuatro años (de Plan Colombia) la inversión de tres mil millones de dólares. Luego de los cuales, el país sólo ha resultado ofreciendo una reducción relativa del número de hectáreas cultivadas, cientos de miles de desplazados internos, unos pocos planes de sustitución de cultivos, la mayoría de los cuales toda-

Recomendaciones

A Europa

- Asumir un rol más visible, distanciándose claramente de la posición militarista de EEUU.
- Asegurarse de que los proyectos de Desarrollo Alternativo hagan parte de una política nacional que prevenga que éstos se vean afectados por las fumigaciones o las operaciones militares.
- Evaluar el funcionamiento de los laboratorios de paz antes de extenderlos a otras regiones. Consultar a las autoridades locales de las áreas y a la sociedad civil antes de que se decidan nuevos proyectos de la UE.
- No redirigir los fondos destinados a los desplazados para apoyar los programas de desmovilización y reinserción de los paramilitares; cualquier apoyo a este proceso debe estar condicionado a un marco legal.
- Un rol más activo en la búsqueda de canales de comunicación entre el gobierno y la insurgencia; la solución al conflicto armado pasa por el diálogo.

Al gobierno de Uribe

- Adoptar un marco legal coherente con los compromisos internacionales y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación para el proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares.
- Reconocer que los cultivos ilícitos reflejan también profundos problemas sociales y económicos que no se resuelven por la fuerza. Fortalecer programas alternativos con base en una erradicación manual gradual y concertada.
- Parar la guerra química a las drogas, dados los perjuicios que causan las fumigaciones.
- Fortalecer las instituciones locales garantizando una efectiva presencia del estado que no se limite a lo military.

A Estados Unidos

- En vez de verter más balas y glifosato en un país ya bastante en llamas, considerar las causas subyacentes de la producción de coca y de opio: la pobreza endémica, la marginalización y la exclusión social.
- Un compromiso a largo plazo dirigido a corregir estos problemas arrojaría mejores resultados.

vía no arrojan resultados, una enorme contaminación ambiental y sanitaria, por la ampliación de las zonas de cultivos y las fumigaciones, y una pesada movilización militar selva adentro con la que el gobierno espera eliminar de un solo golpe una insurgencia de cuarenta años de antigüedad y toda la producción de narcóticos de la zona.

Durante un informe del Congreso sobre el Plan Colombia en junio de 2004, el representante demócrata de OH Dennis Kucinich afirmó que el "*Plan Colombia es una operación fracasada de 3.200 millones de dólares*". En la historia de las donaciones, estos cuatro años pasarán a ser vistos como los del despilfarro de una gigantesca inversión. Que no haya que decir lo mismo de los próximos cuatro.

A propósito del 'éxito' de la actual política de drogas

Los últimos resultados de las campañas antinarcóticos (erradicación aérea, incautaciones) han sido analizados y examinados en los pasados seis meses por diversas entidades y grupos de especialistas independientes, coincidiendo básicamente en puntos esenciales que resumiremos así:

- Uno de los principales objetivos de la política en vigor de atacar la fuente para reducir la droga que sale de Colombia con destino a EEUU, no se ha alcanzado. Hoy día los precios de la cocaína y la heroína están más bajos que nunca, y el número de usuarios no se ha reducido de manera significativa.
- El subsecretario de estado para asuntos internacionales de narcóticos, Robert Charles en audiencia ante el Congreso¹ dijo que, "*Estamos minando la industria de los narcóticos*". Pero la realidad es que el poderío económico (y militar) de los grupos narcotraficante sigue siendo enorme, y con ello su capacidad de permear y controlar la sociedad a todos los niveles. El margen de ganancia de la droga sigue siendo tan grande que la industria seguirá floreciendo en Colombia aunque la represión aumente dentro y fuera del país. La oferta de la droga se ha sostenido, y responde ahora a una estructura fragmentada del negocio. Las nuevas organizaciones son más pequeñas y menos visibles, y por lo mismo, más difíciles de detectar y capturar. La extradición de grandes capos – como recientemente el líder del Cartel de Cali – tienen sobre todo un impacto mediático y no representan un freno para los exportadores de drogas.
- La fumigación aérea y la promesa del desarrollo alternativo no sirven para convencer a los campesinos de la inutilidad del cultivo de coca. En el marco de pobreza extrema, desnutrición y desamparo en el que subsisten millones de colombianos, no se puede esperar que estos no quieran aprovechar la rentabilidad del cultivo de coca.
- Los costos de la fumigación son cada vez más altos, y ésta perjudica la salud y los alimentos. Alberto Rueda, ex asesor del Ministerio de Interior y de Justicia colombiano: "*Como asesor pude comprobar que en el Instituto Nacional de Salud no hay seguimiento epidemiológico para saber cuáles son las consecuencias en los grupos o población donde se aplica*". Una afirmación particularmente seria por cuanto el gobierno Colombiano insiste en la seguridad del glifosato asperjado. Rueda dijo también que, "*... es absurdo que para reducir 15.000 hectáreas en un año, con fumigación aérea, se destinen 100 millones de dólares (el presupuesto del Ministerio del Interior y Justicia)*".²
- Cualquier logro, no sólo en materia de erradicación, sino también de seguridad, arriesga ser efímero en la medida en que no haya una estrategia de largo plazo que lo sustente.
- Se necesitan nuevos indicadores para medir y evaluar el avance de las políticas antidrogas, indicadores congruentes con el objetivo de reducir el consumo y la disponibilidad de drogas en los países consumidores. La medición del éxito o no de la política no puede establecerse en sus resultados anualizados, sino que debe verse en dinámicas de mediano y largo plazo. Aunque en 2003, según datos de UNODC³, se fumigó una extensión de 132.817 hectáreas

1. Aid to Colombia: The European Role in the Fight Against Narcoterrorism. Robert Charles, Assistant Secretary for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Testimony Before Chairman Cass Ballenger and the House Committee on International Relations Subcommittee on the Western Hemisphere, Washington, DC, November 18, 2004, <http://www.state.gov/g/inl/rls/rm/39301.htm>

2. El especialista en drogas, Alberto Rueda, renunció recientemente como asesor del Ministerio de Interior y Justicia, por su desacuerdo con la política de drogas. Memorando de Alberto Rueda al gobierno colombiano: Colombia debe probar en los hechos, que el sacrificio de sus mejores hijos no ha sido en vano en la lucha contra el narcotráfico, <http://www.ciponline.org/colombia/041019rued.pdf>

3. Colombia, Coca Cultivation Survey 2003, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), June 2004.

de coca, sólo se obtuvo una reducción de 11.731 hectáreas - descontando las 4 mil hectáreas erradicadas manualmente. Así, la reducción de una sola hectárea implicó la fumigación de 11. El caso paradójico del departamento de Nariño, en donde se fumigó el doble de las hectáreas existentes, y las siembras aumentaron en un 17%.⁴

'Narcoterrorismo'

Hollywood acostumbra a hacer segundas partes de sus películas más taquilleras. Dentro de esta tradición, la administración de Bush ha dado los primeros pasos de lo que ya se podría denominar el Plan Colombia II. La breve pero significativa visita de George Bush a Colombia el pasado 22 de noviembre ha servido para confirmarlo. Como muchos se temían, EEUU está cada vez más involucrado en el conflicto colombiano. Ahora no solamente hay más millones de dólares en juego, sino que se ha duplicado el número de contratistas estadounidenses en servicio en Colombia.

De llegar a concretarse, lo más seguro es que la segunda parte del Plan Colombia conozca el mismo desbalance de su predecesor en la proporción entre el componente militar y el social.

La ayuda militar de EEUU a América Latina se ha incrementado en un 24% desde el 11 de septiembre de 2001, incremento que se ha justificado bajo la bandera de la 'guerra al terrorismo'.⁵ En Colombia, la misión estadounidense dejó de tener un carácter exclusivamente antinarco-ticos, para ser antiterrorista, es decir, contrainsurgente. Un trueque cualitativo que permitió la introducción del concepto de *narcoterrorismo*.

La adopción del esquema que funde narcóticos con seguridad es tal vez el mayor distintivo del período de Uribe. Como dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 del PNUD⁶, bajo Uribe, el país pasó de tener un conflicto armado a ser víctima de la amenaza terrorista - que se nutre de los narcóticos. Al concentrar las fuerzas en el ataque militar a las FARC, el gobierno ignora los asuntos sociales y económicos y las raíces históricas y políticas del conflicto. Y si la mirada miope de Washington no es capaz de diferenciar entre las FARC y al-Qaida, algo más sensato podría esperarse de la administración de Uribe.

Una de las consecuencias más graves del aumento del despliegue militar bajo la etiqueta del narcoterrorismo es que éste lleva implícito el mensaje de que la guerra a las drogas sólo se puede ganar a la fuerza. Además de que se da por hecho que la presencia del ejército en regiones a las que antes nunca había llegado - la penetración en las selvas a través del llamado Plan Patriota - comporta en sí misma la alternativa a los cultivos y negocios ilícitos. Haciendo de la presencia militar la presencia del Estado. Una presencia, además, cuya sostenibilidad está todavía en cuestión. Fuera de que el Plan Patriota se puso en marcha sin prever un plan de contingencia humanitaria ni un componente explícito de derechos humanos para proteger a la gente en las zonas de enfrentamientos.

Los altos costos sociales, ambientales y económicos como consecuencia de la implementación de la estrategia antinarco-terrorista son responsabilidad de los gobiernos estadounidense y colombiano. Por su parte los grupos armados son responsables de los efectos, en esos mismos ámbitos, que causan la articulación de la economía de la droga con la guerra. Cada uno maneja su libreto, en medio del cual están las comunidades. Estas son generalmente invisibles, pero es sobre ellas que recaen los efectos de las acciones de los diferentes actores. La guerra es el principal motor del agravamiento de la crisis humanitaria y el desplazamiento, de la pérdida de la seguridad alimentaria (acrecentada por las fumigaciones), y del debilitamiento de la organización social de las comunidades y de sus perspectivas hacia el futuro.⁷

4. "Política antidrogas" en Colombia... lejos del "éxito", Ricardo Vargas Meza, La Esquina Regional, Septiembre-Octubre de 2004.

5. September's Shadow, Post-9/11 US-Latin America Relations, By Lisa Haugaard, Sean Garcia, Philip Schmid and Mavis Anderson, The Latin America Working Group Education Fund, September 2004, Washington DC.

6. El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, PNUD, http://indh.pnud.org.co/index_plx?f=1103710112

7. Ricardo Vargas, *Drugs and Armed Conflict in Colombia*, en: M. Jelsma, T. Kramer, P. Vervest (editores), "Opium and Conflict in Burma/Myanmar", Silkworm Publisher, Chiang Mai, Thailand, April 2005.

En el marco de la guerra al terrorismo, el Desarrollo Alternativo ha quedado articulado a la lucha antiterrorista perdiéndose de vista completamente las causas sociales y económicas de la problemática. Y aunque es cierto que se requiere de un mínimo de condiciones de seguridad en una región que garantice la marcha de los planes de desarrollo, también es verdad que la 'seguridad' se obtiene no solamente con lo militar sino con el desarrollo de otros frentes, como el de la justicia, la educación, y la infraestructura.

La militarización del país no va a acabar con los cultivos ilícitos, ni con el narcotráfico, ni tampoco va a ponerle fin al conflicto armado, aunque las FARC se hayan replegado⁸ y las autoridades presenten sus cuadros y estadísticas que dan fe de una reducción de la violencia y los secuestros. Colombia es un país armado hasta los dientes. La introducción de más armas, personal entrenado, tanques y aviones de guerra, sólo va a servir para prolongar el conflicto, en el que, insistimos, la primera víctima es la población civil.

Las armas no son precisamente el instrumento más adecuado para ayudar a resolver los complejos problemas sociales y económicos que agobian el país, ni van a generar las prácticas democráticas y de paz necesarias para construir la sociedad. El documento del PNUD antes mencionado es explícito en señalar que en Colombia el principal enemigo es la guerra, que ha dejado de ser periférica, para estar cada vez más al centro, ganando cada vez más terreno, convirtiéndose en un freno absoluto para el desarrollo humano. La primera tarea del país debería ser derrotar la guerra. Cualquier inversión que represente un aumento de lo bélico, será un paso atrás en la vía de la superación del conflicto.

La óptica militarista que predomina contra el 'narcoterrorismo' tiene varios inconvenientes:

- desconoce las complejas problemáticas subyacentes tanto al problema de las drogas como al de la violencia;
- da por hecho que el problema de las drogas se resuelve por la fuerza;
 - que el conflicto armado se resuelve con la intensificación del conflicto, es decir, más guerra a la guerra;
- ha facilitado la consolidación de estructuras narcotraficantes convencionales.

De otra parte, si bien es cierto que la insurgencia colombiana tiene nexos funcionales con los distintos niveles del circuito de las drogas, con grupos organizados del narcotráfico tanto para el suministro de materia prima, como para el facilitamiento de rutas o suministro de sustancias ya procesadas para su exportación⁹, no lo es menos que la militarización de la estrategia contra el 'narcoterrorismo' ha permitido el fortalecimiento de nuevos sectores del narcotráfico, que han aprovechado política y económicamente, la focalización sobre los grupos armados insurgentes.

A su vez, la lentitud en los procesos de extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes, y la falta de claridad sobre el uso de los recursos ya incautados al narcotráfico, desfavorece la creación de condiciones que inhabiliten el territorio colombiano como lugar expedito para la continuidad del narcotráfico. En la actualidad no hay mecanismos que establezcan con transparencia la responsabilidad del narcotráfico (y de los grupos armados que han participado en ese proceso) en la paulatina y violenta expropiación de territorios que han sufrido las comunidades indígenas, negras y campesinas colombianas.

Paramilitarismo y narcotráfico

La estrategia contra el 'narcoterrorismo' es particularmente problemática en Colombia debido a la manera inconsecuente como se aplica: mientras las autoridades perciben a la insurgencia como un grupo narcotraficante desconociéndoles de plano cualquier dimensión política, hacen caso omiso de la naturaleza narcotraficante de los grupos paramilitares para resaltar principalmente su carácter contrainsurgente, es decir, su motivación política. Con el resultado de que la estrategia recae solamente sobre los primeros, a pesar de que no es un secreto para nadie la intrínseca y larga relación de los paramilitares con el narcotráfico.

8. La Fundación *Seguridad y Democracia* publicó un estudio en el que plantea que la actual estrategia de repliegue de las Farc busca evitar la confrontación abierta con la fuerza pública para producir su desgaste.

<http://www.seguridadydemocracia.org/monitordesequidad/observatorio/observatorioII.pdf>

9. Ricardo Vargas, op cit.

Esta inconsecuencia en la aplicación de la estrategia contra el narcoterrorismo conlleva finalmente a contradicciones graves por parte de su principal instigador, el gobierno estadounidense. Si las AUC están en la lista de organizaciones (narco)terroristas del Departamento de Estado, y varios de sus principales líderes, como el señor Mancuso, fueron sindicados en 2000 por la Fiscalía general estadounidense por exportar cocaína a EEUU, cómo es posible que el Departamento de Justicia de EEUU haya aprobado recursos (tres millones de dólares) para colaborar con la desmovilización de miembros de las AUC. ¿No es ésta una clara violación a la ley de ese país que prohíbe la asistencia a grupos terroristas?

Al parecer la presteza con que se ha desarrollado el proceso de desmovilización de los paramilitares, ha tomado no sólo desprevenido al gobierno colombiano - quien hasta el momento aún no cuenta con un marco jurídico que garantice una adecuada aplicación de la ley - sino que ha propiciado también improvisaciones de parte de Washington. Colombia necesita indudablemente fondos para la reinserción de los campesinos ex combatientes de las autodefensas, pero EEUU debería condicionarlos a la imposición previa de la justicia. Como si USAID (la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo, de donde provendrían los recursos de ser aprobados) suministrara fondos para subvencionar a los pequeños narcos que se quedaron sin empleo con el hundimiento del Cartel de Cali.

La paz de los 'paras' – Un análisis de la Colombia de comienzos de 2005 no necesita ser muy profundo para advertir que en un país en el que casi todo el mundo ha salido perdiendo por el conflicto, si alguien ha ganado algo, y mucho, son los paramilitares y con ellos el narcotráfico colombiano. Estos sectores se han beneficiado de la privatización del uso de la fuerza, que les ha permitido desalojar no sólo a la guerrilla de sitios estratégicos, sino a la población civil, para pasar a ocupar ellos esos espacios. En tanto que vencedores del conflicto, no es de extrañar que a los grupos paramilitares (y a los narcotraficantes que se les han asociado para aprovechar las ventajas resultantes del proceso) les interese ahora la paz, que les permitirá legalizar sus intereses económicos y consolidarse como fuerzas regionales en el orden político y de seguridad.

La desmovilización de los 'paras' no es en sí misma cuestionable. Al contrario. Como hemos indicado antes, en un país tan armado como Colombia, cualesquiera armas y combatientes que se le resten al conflicto en algo habrán de contribuir a la pacificación del país. Pero Colombia debe ser consciente del carácter de la paz que pactan ahora los paramilitares para exigir de estos las contraprestaciones que ameriten.

Colombia es hoy día un país 'paramilitarizado'. Importantes regiones del territorio colombiano están hoy en manos de paramilitares. De acuerdo a estadísticas de CODHES, entre 1997 y 2003, los 'paras' adquirieron cinco millones de hectáreas de tierra, valiéndose de chantajes, despojo violento a sus propietarios, o por desplazamiento de la población local¹⁰.

Directa o indirectamente, las organizaciones paramilitares tienen el dominio económico, político y jurídico de importantes regiones de Colombia. Por medio del terror, han pasado a infiltrar y manejar los hilos de gobernaciones y alcaldías, han hecho nombrar funcionarios, han corrompido instituciones e incluso se han apropiado de recursos públicos. En muchas de sus zonas de influencia, según ha denunciado la prensa colombiana, las autodefensas han logrado establecer un 'para-Estado' dentro del Estado, en donde se mueven funcionarios estratégicos nombrados por las autodefensas por plata o intimidación.

Según cálculos hechos en 2003 por la Contraloría general de Colombia, que hacen parte de un estudio sobre la 'narcorreforma' agraria, cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras productivas – el 48% del total en el país – están en manos del narcotráfico. Lo que hace de este país un 'narcofundio'. Una parte significativa de este territorio está en manos de paramilitares en vías ahora de legalización con el proceso de paz.

10. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES. Según Harvey Danilo Suárez, director ejecutivo de Codhes, los departamentos más afectados por procesos de despojo de tierras son Tolima, Putumayo, Choco, Antioquia, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Cesar y Bolívar, <http://www.codhes.org.co/>

Un caso típico es la región del Catatumbo, en donde el llamado Bloque Catatumbo de las Auto-defensas es amo y señor del territorio. La bien publicitada desmovilización de este Bloque el pasado mes de noviembre, en lo que las autoridades presentaron como el fin de una época, no representa otra cosa que la legitimación y garantía de continuación de lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas, ahora bajo otro ropaje. El viejo lema de, 'que todo cambie para que nada cambie'.

A lo largo de 2004, diversos analistas independientes, así como los diferentes medios de prensa colombianos, denunciaron repetidamente la consolidación de los paramilitares en los diversos territorios recuperados por el ejército colombiano. Hecho que explica en gran parte el buen desempeño de las cifras en materia de seguridad en los últimos dos años de administración Uribe. La reducción de las tasas de violencia, homicidio, en departamentos y zonas de alta presencia paramilitar, más que a la efectiva acción de la ley, obedecería a la desmovilización práctica de estos grupos. Un caso dicente es el de la Comuna 13 de Medellín, en donde la disminución de los asesinatos está asociada a la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara luego de que sus integrantes tuvieran el control social, económico y político de la zona. El paramilitarismo no se ha ido de Medellín. Su presencia reviste ahora otras formas.

El 'desarme' y la 'desmovilización' de los 'paras' no significa necesariamente la desparamilitarización del país, y a menos que se tomen las medidas necesarias para lograrlo, la paz de los 'paras' podría significar precisamente lo contrario: la consolidación de la paramilitarización. Las bases para una verdadera superación de la paramilitarización de la sociedad, la economía y la política, parten de la existencia de un marco de verdad, justicia y reparación en el que uno de los temas centrales debe ser el del uso y tenencia de la tierra. El avance paramilitar, que ha resultado en una contrarreforma agraria, amenaza con devolver a Colombia a su pasado feudal y caciquista, alejándola de la moderna aspiración de pluralismo y democracia.

Marco legal - Las Autodefensas han estado aprovechando el vacío normativo en el que se han estado produciendo las desmovilizaciones para acelerar estos procesos sin tener que responder ante una justicia (que no existe) por sus crímenes. El gobierno de Uribe no ha sido transparente en su proceso de diálogo con las AUC, y se ha valido del efecto mediático que crea la entrega de armas y el anuncio de la devolución de algunas tierras, para neutralizar esta falta de transparencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado en claro que si los crímenes de las autodefensas no son sancionados, la administración de Uribe pasará a ser vista como co-responsable.

Además, tal como lo han denunciado diversas organizaciones de la sociedad civil, la ACNUR, y la misma prensa colombiana, en contraste con la rápida consecución de recursos para el proceso con las autodefensas, el gobierno no ha mostrado premura ni capacidad para resolver temas sociales gravísimos como la atención a los desplazados, que son víctimas de la guerra. El tema de los desplazamientos ni siquiera ha sido tratado en la mesa de Santa Fe de Ralito en donde se adelantan negociaciones.

Hasta el momento el gobierno ha ignorado la propuesta jurídica para el tratamiento que se debe dar a los autores de delitos atroces y las reparaciones a las víctimas, proveniente de algunos sectores del Congreso colombiano - entre los cuales varios uribistas - concediéndose un plazo hasta marzo de 2005 para presentar su propio marco legal. El proyecto de los congresistas es explícito en los delitos inexcusables, y contempla la confesión como un requisito indispensable para acceder a las concesiones judiciales. El gobierno de Uribe por su parte parece más interesado en aumentar su nivel de incidencia arrogándose decisiones judiciales, poniendo en manos del Ejecutivo la facultad de elaborar el marco jurídico bajo el cual se juzgue a las autodefensas.

Todo hace suponer que el año 2005 será un año re-electoral. Uribe parece querer seguir apostándole a la política de mano dura con la que ganó en 2002. La súbita extradición del líder guerrillero de las Farc, 'Simón Trinidad' - a pesar de su carácter anticonstitucional - delata claramente el uso político que el gobierno le ha dado en este caso a la figura jurídica de la extradición. Uribe cuenta con el desprestigio nacional e internacional que han sufrido las FARC en los últimos años debido a los numerosos secuestros y casos de masacre a la población civil, y espera sacar provecho de este acto simbólico contra esa organización insurgente.

Conclusión y Recomendaciones

Haber ligado el problema de las drogas con el problema de la seguridad, independientemente de los argumentos con que esto se justifique, significa la reafirmación de una política errada que ha pasado a operar ahora en un ámbito de mayores dimensiones. Aunque no resulte muy visible por el momento, el traslado de la guerra internacional al terrorismo a las montañas y selvas colombianas traerá consecuencias que sólo contribuirán a incrementar los altos e inútiles costos que viene pagando desde hace tiempo la nación colombiana.

La próxima Mesa de Donantes de Cartagena deberá tener en cuenta la experiencia real – más allá de la manipulación de las cifras - de estos últimos cuatro años en materia de guerra al narcoterrorismo, así como el estado en el que se encuentra el país luego de su aplicación, y como resultado de los desarrollos de los diferentes procesos como el de los paramilitares. Finalmente, no debería pasar desapercibido el hecho de que la reunión del 3 y 4 de febrero se desarrolla en Cartagena, la ciudad de Colombia con uno de los índices más altos de pobreza. La miseria que se vive en amplias zonas marginales de esta ciudad, con una población compuesta en su mayoría por desplazados del interior del país, es sólo equiparable a la de los países más desfavorecidos del África. Una situación inédita una década atrás.

Recomendaciones a Europa

- Esta es una excelente oportunidad de entrar a jugar un rol más visible, con el interés de modificar en lo posible los lineamientos que no han funcionado en el pasado. Resaltamos la solicitud de la última reunión del Consejo de la Unión Europea sobre Colombia el pasado mes de diciembre a las autoridades colombianas, para la rápida adopción de un amplio marco legal - acorde con los compromisos internacionales y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación - para el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales.

- Aunque en los últimos cuatro años Europa ha tratado de distanciar su posición de la actitud militarista liderada por EEUU, se ha mantenido, no obstante, también a lo largo de este tiempo a la saga de EEUU, sin atreverse a asumir un rol más protagonista. No es de extrañar que refiriéndose a la ayuda europea, el subsecretario para narcóticos, Robert Charles, hable de, "*... nuestros esfuerzos para promover la ayuda europea*", que suena a algo así como si los 120 millones de dólares que la UE donó a Colombia en 2003, de algún modo hubieran sido el resultado de los esfuerzos de EEUU para promover la cooperación europea con Colombia.

- En su discurso para Colombia, Europa se ha caracterizado por subrayar el impulso del estado de derecho, reforma al sistema judicial, derechos humanos, y en general enfrentar la crisis humanitaria. Igualmente se ha expresado a favor de promocionar lo económico, el desarrollo social, y el alivio a la pobreza. Europa debe ser consciente de que las condiciones que genera la actual política 'antinarco-terrorista' de EEUU no facilitan el ambiente para proyectos de esta naturaleza. Mientras los programas de Desarrollo Alternativo no hagan parte de una política general, de nivel nacional, persistirá el riesgo de que sean fumigados o afectados por las operaciones militares.

- Concretamente respecto a los Laboratorios de paz, valdría la pena hacer una evaluación seria sobre su funcionamiento antes de seguir implementándolos en otras regiones. Si el modelo ha funcionado en algunas partes – no obstante las enormes dificultades y riesgos por los que ha atravesado el del Magdalena Medio - su generalización no es necesariamente lo más adecuado. Hay que darles más espacio a las autoridades locales, discutir con éstas las particularidades de la región antes de decidir la implementación de uno u otro tipo de proyecto.

- Respecto al proceso con los paramilitares, Europa no debe desviar los fondos que estaban destinados a los desplazados, para apoyar los programas de desmovilización y reinserción de los paramilitares. El apoyo a estos últimos debe estar condicionado a la adopción por parte del gobierno colombiano de una normativa jurídica que reconozca los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

- Con la óptica de que la solución del conflicto armado colombiano se logra a través del diálogo, Europa podría asumir un rol más activo en la búsqueda de posibles vías de comunicación entre

el gobierno y la insurgencia. Sólo la mediación de una instancia de peso como la Unión Europea podría garantizar el compromiso y la seriedad que se requiere de las partes en un proceso de paz.

Recomendaciones al gobierno de Uribe

- El gobierno debe reconocer que los cultivos ilícitos no son solamente una fuente de financiación del terrorismo, sino que son la expresión de problemas sociales y económicos de fondo a los cuales hay que darles un manejo distinto al de la fuerza. En este contexto, y ante los efectos nocivos de las fumigaciones y a la impopularidad creciente de esta política, sería de interés de la presente administración, sobre todo ahora que da inicio a una campaña re-electoral, fortalecer los programas de erradicación manual gradual y concertada, y de sustitución de cultivos. Para esto se deben tener en cuentas las experiencias locales de comunidades y entidades que buscan manejos concertados al problema. Colombia es un país de regiones diversas. El patrón único que promueve el gobierno (Familia Guardabosques) no se puede aplicar indistintamente dada esta diversidad social, cultural y ecológica.

- Fortalecer las instituciones locales con una efectiva presencia del Estado, no solamente en lo militar. Que el proceso que se adelanta con los paramilitares no se quede en el simple aparente desarme sino que represente la verdadera proscripción de las mafias y fuerzas corruptas locales.

Recomendaciones a los Estados Unidos

- El uso de la fuerza sólo ha reportado unas once mil hectáreas de menos en 2003, devastación de amplias zonas, más pobreza y enfermedad. Que cuando las autoridades antinarcóticos estadounidenses se den cuenta del fracaso de esta política de balas y glifosato, no quieran experimentar con soluciones más catastróficas como otros químicos más potentes, o el ya varias veces anunciado hongo fusarium oxysporum, sino que examinen otras vías más sostenibles y con menos efectos negativos colaterales.

- La solución del problema colombiano no pasa por las armas. En vez de seguir incendiando con la ayuda militar un país ya bastante en llamas, el gobierno de Washington debería tomar en consideración los análisis y conclusiones de decenas de estudios realizados en el propio EEUU por grupos de especialistas independientes, y reenfocar su atención en las causas subyacentes de la producción de coca: la pobreza endémica, el marginamiento y la exclusión social en la que sobrevive un alto porcentaje de la población colombiana. En materia de ingresos y desarrollo humano, Colombia es hoy día un país más pobre que hace diez años. Un compromiso a largo plazo y sostenido tendiente a corregir estos problemas reportaría mejores resultados.

- Un país como Colombia no debería estar sometido a la buena voluntad caritativa de una mesa internacional de donantes, sino que debería ser capaz de asumir por su propia cuenta sus responsabilidades. Esto podría ser más posible, de hacer parte Colombia de un marco comercial más justo y adecuado con su realidad. Es preocupante que Colombia, y otros países andinos, hayan optado por el TLC sin haber tomado medidas previas que ayuden a los sectores que saldrán perdiendo como consecuencia de algunos de los acuerdos comerciales. Mientras EEUU cuenta con programas para proteger los impactos negativos de las negociaciones comerciales con otros países, no sucede así con los países pequeños. Por eso resulta casi inmoral que EEUU mantenga una posición inflexible respecto al sector agrícola, presionando acuerdos bilaterales con un país como Colombia, a quien pretende estar ayudando a salir de la crisis. Una mayor generosidad en el asunto crucial del comercio de productos agrícolas y otros, sería la verdadera ayuda que Colombia necesitaría.